


## SUBSANACIÓN DEMANDA RAD. 2021-259

amarfi cordoba murillo <amarficordoba@gmail.com>

Mié 03/11/2021 15:03

Para: Juzgado 04 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j04lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Camilo Andres Galeano <notijudiciales@esesurorient.gov.co>; agesoc@hotmail.com <agesoc@hotmail.com>

 2 archivos adjuntos (3 MB)

Subsanación jose alcides.pdf; comprobante de envio correo jose.pdf;

Cordial saludo.

Adjunto subsanación de demanda y anexo para los fines pertinentes.

Dte: Jose Alcides Cortes

Ddo: Red de Salud del Suroriente E.S.E y AGESOC

Rad. 2021-259

Cordialmente,

AMARFI CÓRDOBA MURILLO

Apoderada parte demandante



Santiago de Cali, octubre de 2021

Doctor

**JORGE HUGO GRANJA TORRES**

**JUEZ CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

E.S.D

**REFERENCIA:** SUBSANACIÓN DE DEMANDA

**DEMANDANTE:** JOSE ALCIDES CORTES

**DEMANDADO:** RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E Y ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA DE SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"

**PROCESO:** ORDINARIO LABORAL

**RADCIACIÓN:** 2021-259

**AMARFI CÓRDOBA MURILLO**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Cali, identificada con la C.C. No. 67.017.726 de Cali, Valle, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la T.P No. 150223 del C.S. de la J; actuando como apoderada de la parte demandante, con el acostumbrado respeto y dentro del término legal, SUBSANO LA DEMANDA en los siguientes términos:

**PRIMERO:** Aporto prueba de envío de la demanda junto con los anexos vía correo electrónico a la parte demandada Red de Salud del Suroriente E.S.E ([notijudiciales@esesurorient.gov.co](mailto:notijudiciales@esesurorient.gov.co)) y Asociación Gremial Especializada ([agesoc@hotmail.com](mailto:agesoc@hotmail.com)) en Salud del Occidente "AGESOC" al momento de radicar la demanda el día 23 de junio de 2021; sin embargo, adjunto tirilla de envío físico por Servientrega de la demanda junto con sus anexos a las entidades demandadas.

**SEGUNDO:** Referente a que "NO SE AGOTÓ LA VÍA GUBERNATIVA ANTE LA E.S.E DEMANDADA", es pertinente manifestar al despacho que, en la Jurisdicción Ordinaria Laboral y en el presente caso, no es requisito de procedibilidad para acudir a dicha jurisdicción agotar la vía gubernativa, lo que sí es haber realizado la RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA, tal como lo establece el Art. 6 del C.P.L.S.S, el cual señala:

**"ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA.** *Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción. Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, ésta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo.*

En este contexto se pronunció la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-792/06 así:

Sentencia C-792/06

### **Alcance de la norma demandada**

El aparte normativo acusado tiene como antecedente la previsión que estaba contenida en el artículo 7° de la Ley 24 de 1947, por medio del cual se modificó el artículo 2° de la Ley 6ª de 1945 para disponer que “[t]ambién conocerá la justicia del Trabajo de las controversias que se susciten por razón de las primas, sueldos, bonificaciones, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, cesantías y demás derechos y prestaciones sociales que tengan su origen en leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional; ordenanzas, decretos y resoluciones de carácter departamental, acuerdos municipales o reglamentos particulares de entidades e institutos oficiales o semioficiales, siempre que se haya agotado el procedimiento de reclamación que en tales disposiciones se establezca.” Agregaba esa norma que “[p]ara estos efectos se entenderá haberse agotado el procedimiento la tardanza de un mes o más en resolver la solicitud.”

Con posterioridad en el Código Procesal del Trabajo<sup>[5]</sup> se dispuso que:

**ARTÍCULO 6. ACCIONES CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO, ADMINISTRATIVAS O SOCIALES.** *Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social podrán iniciarse sólo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente.*

En este contexto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo, quien pretendiese demandar en juicio ordinario

laboral a una entidad de derecho público, a una entidad administrativa autónoma o a una entidad de derecho social, debía elevar un reclamo directo a la Administración previo a la demanda y que el agotamiento de esa reclamación administrativa era un factor de competencia para el juez laboral. Sobre al particular, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 7 de octubre de 1996<sup>[6]</sup> señaló que:

*“... la figura del agotamiento de la vía gubernativa tiene una entidad propia en tratándose de los trabajadores al servicio del Estado en los juicios de competencia de los jueces del trabajo, y está regulada por el artículo 7° de la ley 24 de 1.947 -que modificó el inciso segundo del artículo 58 de la ley 6ª de 1945-, el cual dispuso en su inciso segundo que para efectos laborales, se entenderá haberse agotado el procedimiento gubernativo la tardanza de un mes o más en resolver la solicitud.*

*“Como se ve la legislación del trabajo se anticipó a establecer -para esta clase de asuntos-, las consecuencias del silencio de la administración frente a la solicitud inicial del interesado, mediante el otorgamiento de un plazo de un mes vencido el cual operaba la ficción de una respuesta negativa, como una modalidad de agotamiento de la vía gubernativa que desde entonces lo habilitaba para acudir a la jurisdicción en procura de sus derechos desconocidos.*

*“Se sigue de lo anterior que los referidos trabajadores cuando formulan peticiones de carácter laboral a su empleador oficial no están regidos por el Código Contencioso Administrativo y demás normas que lo adicionan, que regulan por vía general el agotamiento de la vía gubernativa -cuyas previsiones sí son aplicables a los empleados públicos-, sino por el artículo 7° de la ley 24 de 1947, por su carácter especial, conforme al cual una de las formas de agotamiento de la vía gubernativa para aquellos trabajadores se configura cuando transcurrido un mes a partir de la petición primigenia, la administración no ha notificado al interesado la decisión que la resuelva.*

*“De allí se infiere que mientras no se venza ese término o no medie comunicación de respuesta, la jurisdicción ordinaria no adquiere competencia, porque la administración cuenta con ese plazo de gracia para enmendar sus posibles errores y para resolver al administrado, razón por la cual aun no se encuentra configurado uno de los presupuestos procesales para asumir el conocimiento como es el agotamiento de la vía gubernativa exigido por el artículo 6° del C.P.L. ”.*

De acuerdo, entonces, con la normatividad anterior a la expedición de la Ley 712 de 2001, la previa reclamación administrativa constituía un factor determinante de la competencia del juez laboral, quién solo la adquiría una vez agotada la vía gubernativa, la cual, por su parte, estaba sujeta a unas precisas condiciones en el régimen administrativo, en particular en cuanto a los recursos al alcance del administrado y los términos para la interposición de los mismos. En efecto, tanto la Ley 24 de 1947, como el Código Procesal del Trabajo remitían a un procedimiento reglado, puesto que la ley se refería al agotamiento del “*procedimiento de reclamación*” que se hubiese establecido en las disposiciones que daban origen a los derechos reclamados, y el código preveía el agotamiento del “*procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente*”. A su vez, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia<sup>[7]</sup>, existía perfecta armonía entre el artículo 7° de la Ley 24 de 1947 y el artículo 6° del C. de P.L. en la medida en que este último era claro al prever que las acciones contra una entidad de derecho público solamente podrían iniciarse cuando se hubiese agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente, lo que impedía, en criterio de la Corte Suprema, confundir la petición inicial con el agotamiento de la vía administrativa, y por ende, tomar la primera como el inicio del término prescriptivo, sin tener en cuenta que cuando la Administración no responde la reclamación administrativa “... *dentro del plazo perentorio de un mes, solamente vencido éste, era dable empezar a contabilizar el lapso de la eventual extinción ipso jure del derecho.*”<sup>[8]</sup>

La Corte Constitucional, en Sentencia T-01 de 1999, acogió la jurisprudencia sentada sobre este punto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y consideró que una interpretación contraria a la expresada por la Corte Suprema y conforme a la cual, en los términos de los artículos 6 y 151 del C.P.L. y 488 del C.S.T., para interrumpir la prescripción basta el simple reclamo del trabajador, con lo cual comienza a correr el nuevo término, independientemente de lo concerniente al agotamiento de la vía gubernativa que tiene su trámite especial<sup>[9]</sup>, constituía una vía de hecho, por desconocer el principio de favorabilidad, que la Constitución entiende como “... *situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho...*”.

En ese contexto, tal como consta en la demanda ciudadana y en algunas de las intervenciones que se produjeron dentro del expediente que dio lugar a la Sentencia C-060 de 1996, había quien estimaba que el régimen legal sobre la materia, independientemente de las señaladas precisiones jurisprudenciales, planteaba ciertas dificultades para los trabajadores del Estado y hacía más gravosa su situación frente a la de los trabajadores particulares, en la medida en que a aquellos, como condición para acceder a la justicia laboral, se les imponía la necesidad de agotar un trámite,

cuya complejidad, derivada, en ocasiones, de la falta de precisión en la regulación legal, conducía a frustrar la defensa de sus derechos ante los jueces ordinarios, al paso que para los trabajadores particulares la sola reclamación presentada ante el empleador interrumpía el término de prescripción, sin que, por otro lado, ni tal reclamación, ni la respuesta del empleador, constituyesen presupuestos para poder acudir al juez laboral.<sup>[10]</sup> En particular se señalaba que no existía una reglamentación específica del agotamiento de la vía gubernativa aplicable a los servidores públicos que querían acudir a la justicia ordinaria laboral, salvo en cuanto al término especial de un mes para la ocurrencia del silencio administrativo negativo, y que, entre otras cosas, además de la disparidad de criterios que podría presentarse sobre el tipo de reclamación que debía presentarse ante la Administración, tampoco había claridad sobre el contenido de la misma para que fuese tenida como suficiente para agotar el requisito de procedibilidad de las acciones ante la justicia ordinaria laboral.

La disposición acusada, contenida en la Ley 712 de 2001, de alguna manera se orientó a resolver esas inquietudes. Así, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 154 de 1999 - Cámara, se expresó que “[la doctrina ha entendido que el agotamiento de la vía gubernativa (artículo 6° CPT) es un factor de competencia”, y que en esa medida, “[e]l proyecto propone una regulación más clara sobre la reclamación administrativa y sus efectos, ajustándose a la actual estructura del Estado, señalando expresamente el plazo de un mes para entender ocurrido el agotamiento en caso de no responderse la petición y consagrando la suspensión del término de prescripción durante el tiempo en que se esté adelantando la correspondiente reclamación.”<sup>[11]</sup>

Esa norma introdujo, en lo que concierne al debate que aquí se ha planteado, tres modificaciones significativas al contenido del anterior artículo 6° del Código Procesal del Trabajo: Primero, sustituyó el requisito de agotar el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente, que se había interpretado como la necesidad de agotar la vía gubernativa en los términos de la correspondiente regulación legal, por el de agotar una “reclamación administrativa”, que la misma norma define como “... el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda”<sup>[12]</sup>. En segundo lugar, incorporó en el texto de la norma la previsión que ya se venía aplicando jurisprudencialmente a partir de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 24 de 1947, según la cual la reclamación gubernativa se entendía agotada por la tardanza de un mes o más en resolver la solicitud. Y, finalmente, añadió a la disposición el inciso conforme al cual mientras estuviese pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa “... se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.”.



En ese contexto procede la Corte a analizar, a la luz de las disposiciones constitucionales, la manera como la disposición demandada ha regulado el agotamiento de la reclamación administrativa como presupuesto para acudir a la justicia ordinaria laboral, para lo cual se referirá en primer lugar al alcance del derecho de petición y de las figuras del agotamiento de la vía gubernativa y el silencio administrativo negativo.

## **5. El agotamiento de la vía gubernativa y el silencio administrativo negativo**

De manera general puede decirse que la necesidad de agotar la vía gubernativa como presupuesto para acudir a la jurisdicción constituye un privilegio de la Administración, derivado del principio de autotutela administrativa y por virtud del cual debe brindarse a los entes públicos la oportunidad de pronunciarse sobre sus propios actos antes de que las controversias que hayan surgido en torno a ellos sean planteadas ante los tribunales.

Sobre esta materia, específicamente en el ámbito de la justicia ordinaria laboral, que es el que interesa al asunto que se viene tratando, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, antes de reclamarse ante los estrados laborales de la jurisdicción ordinaria alguna pretensión de orden social a cualesquiera de las entidades enunciadas en el artículo 6° del C.P.L.S.S., se hace necesario que el interesado formule previamente su petición de reivindicación ante éstas<sup>[26]</sup>. Ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia que “... *el anterior procedimiento gubernativo tiene por finalidad que las entidades de derecho público y social con antelación a cualquier controversia ante los juzgados laborales, tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la procedencia o no del derecho que se pretende por el peticionario, y que de ajustarse a la ley la respectiva reclamación, la misma sea reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención del Juez Laboral, la solución de un conflicto en cierne.*”<sup>[27]</sup> En la misma providencia la Corte Suprema de Justicia puso de presente que la doctrina y la jurisprudencia laboral han expresado que “... *a través del instituto de la vía gubernativa se le da a dichas entidades, la oportunidad de ejercer una especie de justicia interna, como que la misma ley les permite conocer de manera primigenia, es decir, antes que a los propios jueces del trabajo, las inconformidades de orden laboral que tengan las personas legitimadas para formularles esta clase de cuestionamientos, para que sean tales organismos, actuando como juez de sus propias decisiones, los que definan la viabilidad de aquellas y puedan así corregir por si mismas, cualquier error en que hayan podido incurrir en torno a las actuaciones que originaron tales desavenencias y evitar de esta manera los traumatismos propios de una controversia judicial.*”<sup>[28]</sup>

En el artículo 6° del C.P.L.S.S. se adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad para la autotutela administrativa, porque al señalarse que la reclamación administrativa cuyo agotamiento es presupuesto para ocurrir ante la justicia ordinaria laboral, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, la sustrae del ámbito del agotamiento de la vía gubernativa previsto en el C.C.A. como requisito para que los particulares puedan acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto, para someterla a una regulación más general y sencilla, conforme a la cual, en todos los eventos en que se pretenda demandar a una entidad pública ante la justicia ordinaria laboral, un presupuesto de procedibilidad de la acción es esa previa reclamación administrativa.<sup>[29]</sup>

Esa previsión que obra en beneficio de la Administración Pública no puede convertirse, sin embargo, en un instrumento para que ésta eluda sus responsabilidades, ni constituirse en factor de indefensión de un administrado que, ante la falta de respuesta de la Administración, se vería imposibilitado para acudir ante la jurisdicción. Por ello, como factor de equilibrio entre la prerrogativa de la Administración y el derecho de acceso a la administración de justicia del administrado, la ley ha previsto la figura del llamado silencio administrativo negativo, por virtud de la cual, transcurrido cierto tiempo sin que la Administración responda, se entiende que la solicitud se ha denegado y a partir de ese momento el administrado queda habilitado para acudir ante los tribunales.

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que si bien el silencio administrativo negativo constituye una garantía para el administrado, al permitirle dar por agotada la vía gubernativa y acudir directamente a la administración de justicia, esa figura no puede asimilarse a la respuesta a la que la Administración está obligada conforme a lo dispuesto en el artículo 23 Superior. Así, la Corte, en la Sentencia T-761 de 2005, señaló que “... *el silencio administrativo negativo, no sustituye la respuesta que debe proferir la administración cuando le ha sido interpuesto un derecho de petición. Lo anterior, por cuanto esa figura administrativa de rango legal, no tiene la fuerza para satisfacer el contenido conceptual de un derecho de rango fundamental y constitucional, como el de petición.*” En esa oportunidad la Corte se remitió a lo que ya se había expresado en la Sentencia T-259 de 2004, en los siguientes términos:

*“El silencio administrativo negativo, permite que el ciudadano acuda ante la jurisdicción contencioso administrativa para discutir el acto ficto mediante el cual se considera que la omisión de la autoridad administrativa en resolver la petición,*



*constituye una respuesta negativa a cuanto fue solicitado por el ciudadano. Pero debe aclararse que los actos fictos configurados con la operancia del silencio administrativo negativo no sustituyen la respuesta material que la autoridad está llamada a proferir, cuando es ejercitado el derecho de petición, tanto que la administración sigue obligada a resolver la petición presentada.*

*Por otra parte el silencio administrativo, sólo es la consecuencia de la evidente violación del derecho de petición, constituyéndose en la prueba de la omisión no reparada de ese mismo derecho.<sup>[30]</sup>”*

*En efecto, la finalidad del silencio administrativo negativo no está orientada a hacer efectivo el derecho de petición, porque aquel no resuelve material y sustancialmente lo solicitado<sup>[31]</sup>. Su finalidad, genera la posibilidad de controvertir el acto presunto generado por la administración, controversia que versará sobre la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración.”*

El silencio administrativo negativo no es equiparable a una respuesta, se trata de una ficción, para fines procesales y establecida en beneficio del administrado, pero que no cumple con los presupuestos de una respuesta que de satisfacción a la petición elevada a la Administración. A este respecto, en la Sentencia T-769 de 2002, la Corte sostuvo que “... la respuesta oportuna, eficaz y de fondo que demanda el derecho de petición no se resuelve con la figura del silencio administrativo, pues esta última tiene un fin de carácter procesal, es decir surge la posibilidad de acudir al control judicial de la administración, pero no cumple con su fin sustancial, cual es obtener una decisión de la administración sobre la solicitud de aclaración, modificación o revocación del acto administrativo recurrido”.

En la medida en que la reclamación que el administrado presenta a la Administración como presupuesto para agotar la vía gubernativa, no obstante su especial regulación legal, es una expresión del derecho de petición, la figura del silencio administrativo negativo, si bien habilita al administrado para dar por agotada la vía gubernativa y acudir directamente a la jurisdicción, no significa que la Administración pueda sustraerse de su obligación de dar una respuesta a la solicitud que le ha sido presentada. Esto significa que en los eventos de silencio administrativo negativo, el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que

a partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción.

En general, los términos de prescripción o de caducidad de las acciones judiciales se han establecido con un propósito de seguridad jurídica. Sobre el particular la Corte ha señalado que la prescripción extintiva “... *cumple funciones sociales y jurídicas invaluable, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social, al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales* ...”. [\[32\]](#)

De este modo, los términos de prescripción o de caducidad de las acciones judiciales establecen una consecuencia adversa a la inactividad de aquellos en cuyo beneficio se han establecido dichas acciones, aspecto sobre el cual la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 31 de octubre de 1950, expresó:

*“El fundamento racional de la prescripción extintiva es análogo al de la prescripción adquisitiva, expresan los expositores Colin y Capitant. El orden público y la paz social están interesados en la consolidación de las situaciones adquiridas. Cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo, debe presumirse que su derecho se ha extinguido. La prescripción que interviene entonces evitará pleitos cuya solución será muy difícil en virtud del hecho mismo de que el derecho invocado se remonta a una fecha muy lejana”.* [\[33\]](#)

Siendo ello así, parecería claro que esos términos extintivos no pueden correr en contra de quien, legítimamente, se encuentra a la espera de la respuesta a una reclamación que ha presentado a la Administración. Y ello no sólo porque es lo que resulta acorde con la naturaleza de los términos de prescripción y de caducidad de las acciones como sanción a la inactividad del interesado, sino también porque el derecho de petición se vería comprometido si el silencio de la Administración, de alguna manera, la exonerase de su deber de dar respuesta a las peticiones que se le formulen, porque el transcurso del tiempo forzaría al administrado a acudir a la jurisdicción para evitar la prescripción de la acción, lo cual, a su vez, implicaría que, una vez admitida la demanda, la Administración perdería competencia para pronunciarse sobre la respectiva reclamación.

De hecho, en estricto sentido, el agotamiento automático de la vía gubernativa implicaría que la Administración pierde competencia para pronunciarse sobre aquello que, por ministerio de la ley, se tiene como decidido de manera definitiva en sede administrativa. [\[34\]](#) En tanto que, en las hipótesis en las cuales el silencio

administrativo negativo da lugar a un agotamiento opcional de la vía gubernativa, la ocurrencia del silencio administrativo, tal como de manera expresa se señala en el Código Contencioso Administrativo, no le impide a la Administración resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo a impugnar el acto presunto<sup>[35]</sup>, cuando el agotamiento de la vía gubernativa por virtud del silencio administrativo negativo es automático, la Administración pierde competencia para pronunciarse y los términos de caducidad o de prescripción de las acciones empiezan a correr a partir del momento en el que se configura el silencio. Tal regulación de los alcances del silencio administrativo, más aún cuando se aplica también a la reclamación inicial presentada por el administrado, resulta contraria al derecho constitucional de petición, porque al privar de competencia a la Administración, impide que se produzca una respuesta efectiva a la solicitud del administrado; es violatoria, también, del debido proceso, porque como consecuencia del agotamiento automático de la vía gubernativa, el administrado queda imposibilitado para recurrir el acto ficto y, por consiguiente, no puede controvertir ante la entidad pública la decisión negativa a su reclamación, y es, finalmente, contraria al principio de publicidad de la actuación administrativa, porque permite que la Administración mantenga en reserva las razones de su determinación.

En el presente caso, tenemos que el actor presentó reclamación administrativa ante la Red de Salud del Suroriente E.S.E, foliado dentro del acervo probatorio documental de la demanda del 398 al 404 y la correspondiente respuesta de la entidad Red de Salud del Suroriente E.S.E, folios 405 al 407, cumpliendo así con el requisito de procedibilidad para acudir a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, la cual no establece el agotamiento de la vía gubernativa, en contrario esta, si se encuentra reglada por el Código Contencioso Administrativo en su Art. 50 en la Jurisdicción Administrativa.

Por todo lo manifestado anteriormente, se reitera que, en el presente caso, por ser de la Jurisdicción Ordinaria Laboral no es requisito de procedibilidad agotar la vía gubernativa (los recursos de ley), como si lo es haber realizado la reclamación administrativa ante la entidad pública.

### **ES ASÍ QUE QUEDA SUBSNADA LA DEMANDA.**

Adjunto:

Comprobante de envío por correo electrónico de la demanda y sus anexos a las entidades demandadas.

De usted, atentamente,



---

**AMARFI CORDOBA MURILLO**

CC No 67.017.726 de Cali

T.P No 150223 del C. S. J.





amarfi cordoba murillo &lt;amarficordoba@gmail.com&gt;

**DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA REPARTO 1 DE 2**

1 mensaje

amarfi cordoba murillo &lt;amarficordoba@gmail.com&gt;

23 de junio de 2021, 13:07

Para: repartolaboralcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, notijudiciales@esesuroriente.gov.co, agesoc@hotmail.com, procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Señores

OFICINA DE REPARTO LABORAL

DEMANDANTE: JOSÉ ALCIDES CORTES CORTES

DEMANDADOS: RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E

ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL  
OCCIDENTE "AGESOC"

Adjunto para el reparto, demanda Ordinaria Laboral de primera instancia 1 DE 2, contentiva de:

- ARCHIVO No 1 CARÁTULA, DEMANDA Y PODER (folios del 1 al 32)
- ARCHIVO No. 2 ANEXO 1 PRUEBAS (folios del 33 al 231)
- En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 78 numeral 14 del C.G.P., en lo concordante con el Decreto 806 de 2020, me permito también remitir este correo a las demandadas, al email de notificación judicial que destinó cada una para ello:
- RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E al correo electrónico: notijudiciales@esesuroriente.gov.co
- ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC" al correo electrónico: agesoc@hotmail.com .
- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO al correo electrónico: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Debido a lo extenso del archivo que contiene el Certificado de Existencia y Representación de AGESOC, Solicito al despacho acceder al siguiente enlace para acceder a dicho documento:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Xf3U6k9S6Rm5FpNSpzN-ZjqD\\_biu2GZA?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Xf3U6k9S6Rm5FpNSpzN-ZjqD_biu2GZA?usp=sharing)

Atentamente,

AMARFI CÓRDOBA MURILLO

C.C. 67.01.726 de Cali, Valle

T.P No. 150223 del C.S. de la J

**2 adjuntos** **poder y demanda FOLIADOS.pdf**  
1627K **anexo 1 Jose FOLIADO.pdf**  
11665K





amarfi cordoba murillo &lt;amarficordoba@gmail.com&gt;

**DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA REPARTO 2 DE 2**

1 mensaje

amarfi cordoba murillo &lt;amarficordoba@gmail.com&gt;

23 de junio de 2021, 13:10

Para: repartolaboralcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, notijudiciales@esesuroriente.gov.co, agesoc@hotmail.com, procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Señores

OFICINA DE REPARTO LABORAL

DEMANDANTE: JOSÉ ALCIDES CORTES CORTES

DEMANDADOS: RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E

ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL  
OCCIDENTE "AGESOC"

Adjunto para el reparto, demanda Ordinaria Laboral de primera instancia 2 DE 2, contentiva de:

- ANEXO 2 PRUEBAS (folios del 232 al 410)
- En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 78 numeral 14 del C.G.P., en lo concordante con el Decreto 806 de 2020, me permito también remitir este correo a las demandadas, al email de notificacion judicial que destinó cada una para ello:
- RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E al correo electrónico: notijudiciales@esesuroriente.gov.co
- ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC" al correo electrónico: agesoc@hotmail.com .
- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO al correo electrónico: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Debido a lo extenso del archivo que contiene el Certificado de Existencia y Representación de AGESOC, Solicito al despacho acceder al siguiente enlace para acceder a dicho documento:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Xf3U6k9S6Rm5FpNSpzN-ZjqD\\_biu2GZA?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Xf3U6k9S6Rm5FpNSpzN-ZjqD_biu2GZA?usp=sharing)

Atentamente,

AMARFI CÓRDOBA MURILLO

C.C. 67.01.726 de Cali, Valle

T.P No. 150223 del C.S. de la J

**ANEXO 2 JOSE FOLIADO.pdf**

24109K